Administración Pública: La participación social en la refundación del concepto soberanía

Mario Jesús AGUILAR CAMACHO

SUMARIO: I. Introducción. II. La Globalización. III. El Estado y su Conformación. IV. El Pueblo y La Población. V. La Nación. VI. Soberanía. VII. Variantes De La Soberanía: Popular, Nacional, Estatal. VIII. La Soberanía en el Derecho Mexicano. IX. La Soberanía en la Globalización y el Neoliberalismo.

I.INTRODUCCIÓN

La doctrina y la praxis constitucionalista, así como la Teoría del Estado, nos indican que la soberanía puede ser popular, estatal o nacional. Así, en toda su amplitud y síntesis, la soberanía es un concepto referido al poder público que puede identificarse desde el devenir de cualquiera de sus detentadores: El Pueblo, La Nación, El Estado.

Para la mentalidad pragmática de los fundamentalistas del mercado neoliberal y de los apologeticos globalizadores, lo anterior es sólo un juego de palabras sin contenido económico, y por lo tanto inexistente en su sentido social, político y jurídico. Para los ideólogos del libre mercado solo existe una ley inexorable: el poder público real es de quienes arrojan la riqueza económica del mercado.

En la práctica, la minimización del Estado que postula la economía neoliberal, se ha convertido en una clara movilización de aquél a favor de los grupos económicos más fuertes, y en el innegable hecho de que la nueva economía “sin reglamentaciones” ha sido el producto de la acción deliberada del Estado. Éste no se ha adelgazado y, lejos de ser imparcial, ha tomado *partido*¹.

Difícilmente puede hablarse entonces de un simple *laissez faire, laissez passer*, sino más bien de un Estado como el principal garante y agente de la acción libre de la economía y como principal impulsor activo, en beneficio de quienes detentan la riqueza: La soberanía estatal.

En resumen, frente a la oleada globalizadora, el Estado y su soberanía –nacional o popular - se debilitan frente al Estado; no así el carácter dominante de las grandes corporaciones transnacionales del capital que actúan sirviéndose de los agentes del gobierno -en especial de la

¹ FLORES OLEA, Víctor y MARIÑA FLORES, Abelardo. Crítica de la Globalidad. Dominación y liberación en nuestro tiempo. Fondo de Cultura Económica, México, 2004, pp. 124-129.

Administración Pública-, quienes contribuyen a su consolidación y expansión, principalmente a través de la creación de normas jurídicas ad hoc, su ejecución parcializada o la resolución de controversias que les favorecen.

Sobre esa línea de pensamiento, se aclara que el presente trabajo no se anota en la agenda de la tradición clásica de la abstracción jurídica. Se presentan reflexiones y juicios que buscan de manera preponderante recalcar el valor superior de lo jurídico, con sus principios, valores y vínculos, por sobre la legislación positiva. Si bien es cierto que este análisis, que ocupa algunas páginas, apenas lanza una mirada panorámica en el complejo mundo del derecho administrativo y constitucional; y el interés que anima es la búsqueda de respuestas, no sólo de índole jurídica y política, sino más bien orientadas con una perspectiva más amplia de talante económico y social, así como de respeto democrático, y no tanto limitadas por la frontera topografía marcada por los textos legislativos y la doctrina económica liberal que no presenta opciones de solución a la crisis económica.

En este sentido, si la soberanía se considera sólo como popular, en esta concepción, la nación - entendida como producto de la historia que le da su identidad- ya no tiene derecho de expresión legal. Para la generalidad de los mexicanos es materia conocida que la Constitución del 1917 pretendió establecer una síntesis entre la historia como soberanía nacional y la voluntad del pueblo real y actual, como soberanía popular. Aunque en los últimos tiempos, los gobernantes en un exceso, invocando la supuesta representación de la voluntad soberana de pueblo, como sujetos jurídicos que expresan la voluntad de la persona moral llamada Estado, han adjudicado – de facto- una soberanía estatal, de la cual ellos son detentadores de su manifestación de voluntad. Y lo preocupante es que los gobiernos no quieren ver que hay un entrapamiento debido a que se vive una crisis financiera de dimensiones mundiales que ha beneficiado únicamente a los que la han provocado; y los gobernantes de prácticamente todas las latitudes han entregado la decisión pública a los consorcios, apoyados por sus ideólogos fundamentalistas del mercado -muchos de ellos incrustados en los órganos e instituciones del gobierno- para quienes, sea cual sea el problema, la respuesta es la misma: la reducción de los salarios, la desreglamentación del comercio y de los mercados financieros, la privatización de los servicios públicos, el aumento de la competencia, las ayudas a los bancos por parte de los estados, los cuales, en consecuencia, han reducido gastos, trasladando así los costos de la crisis a las

medianas y pequeñas empresas, a las clases medias, a los trabajadores ordinarios y a las personas desempleadas.²

El sistema político jurídico mexicano requiere de mecanismos consolidados de participación social –de organizaciones no gubernamentales y no individuos aislados- en la confección de la función pública y en su revisión. Es un reclamo social que debe existir una Política Ética de Estado. Cabe dejar claro que no hay vías institucionales para que la sociedad vigile permanentemente a los legisladores, juzgadores y en términos generales a los servidores públicos; es decir, a quienes están a su servicio. Al sentirse alejada de la representación indirecta de los partidos políticos, tampoco la sociedad en su conjunto tiene injerencia en el nombramiento y actuación de los funcionarios públicos.

Y aquí adquiere transcendencia el control del poder público como tema clave de la democracia, pues “la democracia no es la mera aceptación del juego de los partidos Políticos, de forma que existiendo estos, ya no hubiera nada que temer al juego de esos o de otros titulares oficiales o clandestinos del poder.”³

El artículo 3ro. Constitucional refiere que la democracia no es sólo jurídica –de igualdad ante la ley-. Tampoco es exclusivamente política –votar y ser votado para los cargos de elección popular. La democracia en México está definida como un proyecto nacional; es una forma de vida, basada en el constante mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales del pueblo. Al no cumplirse las tres últimas condicionantes, de allí se infiere el argumento de estado democrático “fallido”.

Puntualizo, la globalización ha traído subrayados beneficios, pero en contraposición, desvirtuada y aprovechada por una minoría, también ha traído un sinnúmero de perjuicios para la gran mayoría. Este trabajo pretende hacer algunas aclaraciones sobre las variantes del concepto soberanía, y sus diferencias en cuanto se impone un enfoque sobre su detentador. En este sentido, me anima el propósito de advertir su influencia, teórica y práctica en nuestro sistema jurídico, así como su innegable manipulación, que han servido para dar entrada a la normativa legislativa neoliberal y globalizadora que debiera servir soberana y democráticamente a las mayorías y no sólo a algunos.

² PONS-VIGON, Nicolas, coordinador. Existe una alternativa. Políticas económicas y estrategias laborales más allá de la corriente dominante. Prefacio de Dan Cunniah, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2011.

³ Lowestwein, Karl “Teoría de la Constitución” Ed. Tecnos, 2ª. Edición, Madrid, 1976.

Debemos enfatizarlo y decirlo a quienes están al frente de los órganos de la administración pública: El pensamiento unidimensional del libre mercado ha sido una de las principales causas de la gravedad de la crisis económica mundial; en este sentido y debido a que existe una gran variedad de economías de mercado; por lo tanto es válido decir que también hay distintas y variadas estrategias de los países para hacer frente a la crisis mundial de acuerdo a sus peculiaridades y diferencias en sus niveles de desarrollo; así que se puede afirmar que sí hay para escoger, otras salidas alternativas a la crisis; la primera es recoger el ejercicio soberano y adjudicarlo a quien le corresponda: nación o el pueblo; pero no al Estado ni al mercado. Si los monopolios son malos para los mercados, son incluso peores para nuestras ideas⁴.

II.LA GLOBALIZACIÓN

Pero ubiquemos contexto. Cuando Marshall McLuhan concibió su idea sobre la aldea global, este era un término simple, que significaba el ser humano borrando fronteras físicas y culturales, para comunicarse y entenderse con sus semejantes; individualizarse en medio de un mundo industrializado, que le pretendía masivo. Aunque por otra línea de acción, sería la persona humana de la globalización, sería el contestatario que pretendía Herbert Marcuse frente al hombre unidimensional del capitalismo.

Pero hoy esto ha dado un giro diametralmente opuesto, las políticas económicas neoliberales y el Estado Neoliberal han retenido el concepto para sí mismas y se encuadran dentro del fenómeno que se denomina la Globalización.

Desde esta perspectiva dominante, por Globalización se entiende el proceso en que se generaliza la intercomunicación entre economías, sociedades y culturas, donde se desarrollan y aplican las tecnologías de la comunicación y la informática, junto con los acuerdos entre los Estados para facilitar todo tipo de intercambios, especialmente de orden económico: desregulaciones, eliminación de barreras arancelarias y otros impedimentos, para provocar una mayor interrelación económica entre pueblos y Estados.

El profesor José Cervantes Herrera comenta: “Sin importar la posición desde la que sea analizada la globalización, existen rasgos comunes a todas las interpretaciones, en el sentido de ver en la globalización una etapa avanzada de la división internacional del trabajo, la cual se caracteriza

⁴ Ídem.

por una mayor interacción e interdependencia de los factores y actores que intervienen en el proceso del desarrollo mundial. Estos factores son de índole económico, social, político, ambiental, cultural, geográfico, etc.”⁵

Efectivamente, la Mundialización, alude a la tendencia del capitalismo a constituirse en sistema mundial. La pretensión es que su lógica de comportamiento se imponga como hegemónica en todos los ámbitos de la actividad humana: geográficos, sociales, culturales, ideológicos. El avance de la mundialización capitalista es también una mundialización de valores, idiosincrasias, modas, en fin, de las diferentes formas de ver el mundo⁶.

Sin embargo, dice el recientemente fallecido, el insigne doctor Carlos Llano que: “Uno de los graves problemas de Occidente y de su capitalismo, es haber separado economía y cultura, haber abierto la grieta entre la economía y el hombre, entre las técnicas económicas y la antropología”.

Ahora bien, desde el punto de vista de la ciencia económica, la globalización, es también entendida como una etapa más en el desarrollo del capitalismo como sistema mundial. Por lo que, de igual manera, se entiende por Globalización, el actual proceso de mundialización capitalista. Este fenómeno comprende diversas estrategias para internacionalizar el capitalismo.

De igual forma, la corriente económica sostenida es el neoliberalismo. Significa un nuevo tipo de liberalismo, promover la abolición de la intervención gubernamental en asuntos económicos: no a las restricciones a la manufactura, no a las barreras al comercio, no a los *aranceles*.⁷

Los anteriores conceptos convergen y provocan que en prácticamente todo el mundo, de una forma u otra, el neoliberalismo sea impuesto por los organismos económicos y financieros internacionales: Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros. Estos aplican decisiones económicas acordes con los intereses de las corporaciones transnacionales, las cuales son plasmadas en normas jurídicas por los legisladores y ejecutores que hacen a un lado la tradición, principios y valores de la soberanía nacional y popular, obviamente sin la más mínima consulta democrática.

⁵ CERVANTES José. La Globalización y el Derecho Laboral. *Revista Investigaciones Jurídicas Departamento de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guanajuato*. México. XV. Pp. 15 - 16.

⁶ Ídem.

⁷ Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. Porrúa: Autor

En este sentido, se asegura que este fenómeno mundial ha sido incontenible en América Latina, donde se aplicó por primera vez en Chile tras el golpe militar contra el gobierno del socialista Salvador Allende, en 1973.⁸

El Estado Neoliberal ha sido el vehículo primordial de la globalización actual y de la aplicación del neoliberalismo en la economía. La nueva economía ha implicado severas restricciones a los procesos de decisión política y a las facultades tradicionales de los Estados. Sus disposiciones en materia económica internacional se han estrechado drásticamente y hoy son sometidos a presiones, con frecuencia irresistibles, que “recomiendan” ajustes jurídicos, económicos y sociales, y otras medidas internas, difícilmente compatibles con las opciones de desarrollo social de los pueblos de esos países.

Víctor Flores Olea y Abelardo Mariña Flores nos advirtieron que: “La función ”autoasumida” y “autodesignada” por el Estado consiste, en realidad, en asegurar una desregulación interna (modificaciones legislativas) a fin de disminuir los derechos laborales y mantener (inclusive con mano dura) un orden interno que tiende a exacerbarse por la polarización de la riqueza, la desocupación y el marginalismo crecientes, y por la conmoción social que necesariamente traen consigo la concentración de capitales y la drástica disminución de las políticas sociales.⁹ Continúan la cita anterior: “Como pocas veces antes en la historia moderna, el Estado actual muestra con transparencia su naturaleza de “consejo de administración” de los negocios, aun cuando cumpla otras funciones de regulación gubernamental”¹⁰

Pero, lo anterior va más allá, a los órganos del Estado en su función normativa con frecuencia se les presentan las decisiones como “hechos consumados” que únicamente deben avalar o suscribir, bajo la amenaza de que en caso de no hacerlo se traerían más hondos desastres para la nación.

Desde que el autor Daniel Bell señaló que, en los años sesentas del siglo XX, que había llegado el fin de las ideologías, tal parece que los políticos pragmáticos han querido también desaparecer también el valor de los conceptos –sobreviene la indefinición y la consiguiente confusión significativa, pues ya no hay ni izquierdas, ni derechas, ni liberales ni conservadores, ni

⁸ MEYER, Lorenzo. *Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano*. México. Océano de México.

⁹ Ídem.

¹⁰ Ídem.

absolutistas ni intervencionistas..; simplemente, lo que mejor convenga al momento y al interés de grupo o de partido, o de quienes los patrocinan-. Así, en su perspectiva de alcanzar el poder por el poder mismo, han realizado sus interesadas manipulaciones del concepto a lo largo de la historia en su intento de justificar el devenir del sujeto de la soberanía, y se han dedicado a menospreciar la tradición, los valores y principios que animan el sentido de los textos constitucionales en los cuales se encuentra el proyecto de nación que cimentaron quienes lucharon por construir el moderno Estado mexicano y sus instituciones, cooptando a los funcionarios gubernamentales creadores de normas secundarias y magnificando las leyes y otros instrumentos jurídico normativos de menor jerarquía, no obstante que algunos de los mismos tienen un sello de cuestionable juridicidad o constitucionalidad.

En este sentido coincido totalmente con la postura del Dr. Rafael Estrada Michel, de que es difícil que el constitucionalismo supere la idea de soberanía, dada la tendencia a soberanizar el poder. De hecho, el Estado Constitucional de Derecho, como se conoce actualmente, es un producto de la globalización. Aunque, vale resaltar que las políticas gubernamentales de los últimos decenios han inclinado la balanza del poder a favor del capital.

El tema propende un serio problema que enfrenta el mundo globalizado y globalizador que con su frialdad y su casi tangencial desdén a que los Estados nacionales alcancen formas de organización, acordes a los tiempos y avances de la ciencia y de la técnica, así como en la lucha por los valores democráticos y el respeto de los derechos humanos. En lo cotidiano, da la impresión de que aquellos principios y valores se presentan como antinomias de rivalidad irreductible, en la cual alguno de los actores que componen la organización social –desde la óptica entre quienes poseen el mercado y quienes le sirven, incluido el propio Estado-, alguno de ellos tiene que resultar ganador absoluto.

Para nadie es desconocido que el año de 1994 fue crucial para México. Dos hechos mostraron las paradojas de la historia mexicana. Por una parte, la entrada en vigor en México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TELECAN, NAFTA o TLC), y por la otra, el levantamiento de un grupo rebelde “indígena” en Chipas. Es decir, en México se vivió la manifestación económica, social y cultural, de dos situaciones extremas: De esta forma, en plena incorporación a la globalización y al modelo neoliberal de comercio que se introdujeron por la puerta amplia de nuestro sistema jurídico; por la puerta trasera y subrepticamente, el fenómeno indígena se

presentó ante los ojos incrédulos de la sociedad mexicana y del mundo. Aunque las autoridades y muchos mexicanos pretenden fallidamente “tapar el sol con un dedo”, desde entonces, se tiene que hablar de un “parteaguas” que existe, con un antes y un después de dos referentes: el TLC y el movimiento armado de Chiapas.¹¹ Lo que sí es incuestionable es que, desde el momento de la revuelta armada, el neoliberalismo globalizador y el fenómeno indígena se incorporaron a la agenda de los grandes temas nacionales, aunque la verdad sea dicha, sin el relieve y respeto que se merecen.

III. EL ESTADO Y SU CONFORMACIÓN

Si no diferenciamos los conceptos, se corre el riesgo de confundir el poder con la arbitrariedad o capricho del gobernante, lo cual resulta un abuso condenable que recibe el calificativo de autoritarismo.

Para abordar con precisión el tema, hay varios conceptos que requieren la necesaria teorización - en su sentido original de observar a detalle-, por lo cual se exige que en este análisis vayamos a fondo. En esta orientación, tanto la dogmática jurídica alemana, como los autores franceses e italianos que se inspiraron en aquella-que constituyen la doctrina tradicionalista del Estado-, establecieron como elementos esenciales o indispensables del Estado: *el pueblo, el territorio y el poder adjetivado como soberano*. En este sentido se puede enmarcar que todo Estado sintetiza esos tres elementos y en la medida que los integra se puede considerar como un Estado.

En cierta medida el Estado -como afirma Burdeau “es una realidad abstracta no absorbida por las condiciones fácticas exigidas para su formación. Su existencia -continúa el profesor francés- resulta de un esfuerzo intelectual, no es producto natural de ciertas circunstancias concretas”.

Sin embargo, sin la concatenación de esos tres elementos no existe el Estado. Pueblo y territorio son anteriores a la aparición estatal y mediante la síntesis jurídico-política ejercida *por el poder* logran componer al Estado.

Dice el profesor Pablo Lucas Verdú que: “El pueblo es el elemento personal del Estado; el territorio el factor geopolítico, y el poder soberano el jurídico-político”¹². “Además -continúa mencionando el destacado académico Pablo Lucas Verdú- en la configuración del Estado existe

¹¹ PAZ, Octavio. Chiapas ¿nudo ciego o tabla de salvación?, en Vuelta (Suplemento extraordinario), febrero, 1994, p. C.

¹² VERDÚ, Pablo Lucas. *Curso de Derecho Político*. Madrid. Tecnos, 1981.

una conexión ontológica, histórica, sociológica, lógica, ético-social, cultural y metafísica entre los tres elementos”.

Algunos autores como Kelsen y Smend añaden a los reconocidos elementos, espacial o sea el territorio, y al personal, en otras palabras el pueblo. Al afirmar que dentro de un espacio sólo hay un Estado, es obvio que ello significa también que sólo un Estado cabe dentro de un territorio al mismo tiempo. Aquí valdría preguntar y reflexionar ¿Qué hay de los territorios zapatistas en Chiapas?

La doctrina italiana estima al *gobierno* como elemento estatal. En esta dirección aprecia el profesor Biscaretti di Ruffia agrega por naturaleza un elemento estatal: “el gobierno es el elemento del Estado en cuanto conjunto de instituciones o de órganos que dirigen el Estado. El gobierno es una concreción institucional del poder político que se ejerce sobre individuos, los gobernados, y dentro de unos confines territoriales”.

Conviene tener bien presente lo que señala Pablo Lucas Verdú, al referirnos a que la conexión entre los tres elementos estatales -pueblo, territorio y poder- se realiza mediante el Derecho, tanto normativa como institucionalmente, y nos dice que: “El Estado es un ordenamiento jurídico que comprende tanto normas como instituciones. Las normas fijan y delimitan derechos y deberes a sus destinatarios: los ciudadanos, que son los miembros de una comunidad nacional articulada dentro del Estado, así como a los extranjeros que habitan en su territorio. Las normas pues señalan la competencia del poder estatal, su alcance dentro de sus propios confines, y descansan en instituciones básicas que aseguran, a través de sus órganos correspondientes –el gobierno, como cuarto elemento-, el cumplimiento de funciones estatales: legislativas, ejecutivas, judiciales. El Estado, es la máxima institución. Sus normas e instituciones son objeto del Derecho constitucional, de suerte que la consideración jurídica del Estado se encuentra cabal expresión”¹³. Entonces hace su aparición el quinto elemento estatal: El orden jurídico normativo.

IV. EL PUEBLO Y LA POBLACIÓN

El ser humano, la persona, es el elemento creador y fundamental de toda organización humana: génesis, agente y fin de la misma. De esta forma, la corporación de personas, el pueblo del

¹³ Ídem.

Estado surgió como un elemento proto-nacional, es decir como el elemento primero, prioritario, preeminente, en la organización de esta dominación política.

El término *pueblo* tiene un alcance jurídico-político, a saber: el pueblo como titular del poder constituyente; el pueblo como cuerpo electoral; el cuerpo nacional como sujeto soberano; el pueblo como legitimador del ejercicio del poder en su nombre. A mayor abundamiento y en una primera aproximación sistemática, la nación comprende no sólo al pueblo, o sea la población existente en un tiempo y momento dado, sino, además, a las generaciones pasadas y futuras con lo cual enlaza con el concepto de Nación si se trata del pueblo nacional.

En este sentido, se confirma lo que escribía Jellinek “El pueblo, en su cualidad subjetiva, forma, a causa de la unidad del Estado, una corporación, esto es, todos sus individuos están unidos, enlazados entre sí en cuanto sujetos del Estado: son miembros de éste, que es, por tanto, al propio tiempo, asociación de autoridad y asociación corporativa. Ambos elementos, el autoritario y el de asociación se resuelven en unidad necesaria en la corporación estatal. A causa de la autoridad del poder del Estado es el pueblo objeto de *imperium*, y se encuentra, desde este punto de vista, en una mera subordinación; mas como los individuos, en su cualidad de elementos del Estado, se hallan en la situación de miembros y son, por tanto, sujetos; viven, en este sentido, coordinados. Los individuos, en cuanto objetos del poder del Estado, son sujetos de deberes; en cuanto miembros del Estado, por el contrario, sujetos de Derecho.”¹⁴.

En este sentido, la palabra que considero “clave” para entender al poder político, al gobierno y a la soberanía en el mundo contemporáneo, es esa palabra, entre mítica y seductora, que se pone al servicio de grandes causas o se instrumentaliza en favor de las más mezquinas intenciones políticas. Esta es la palabra “pueblo”.

El pueblo, así en singular, o si se quiere, a la vez abstracto y general, es un conjunto de “ciudadanos”, es decir, de individuos libres e iguales entre sí, cuyo rol social y político, no está determinado, ni por su linaje ni por su adscripción a corporación alguna. El ciudadano, componente esencial del pueblo, es tan sólo un individuo.

La precisión es pues una necesidad, el pueblo y la población, aparecen como sinónimos, pero no lo son. La población es el conjunto de habitantes en un contexto -tiempo y lugar determinados-. El

¹⁴ JELLINEK, Georg. Teoría General del Estado. Traducción de Fernando de los Ríos Urruti. Editorial Albatros. Buenos Aires, 1954. pp. 270 y ss.

concepto de pueblo viene establecido con rigor en el derecho mexicano, pues es el detentador de la soberanía nacional; así el pueblo -que no toda la población- sería sólo el conjunto de ciudadanos, que reúnan las características y requisitos señalados en los artículos 30, 34 y 35 constitucionales; es decir, únicamente aquellos miembros de la población estatal que pueden votar y ser votados -también en un territorio y tiempo preciso-.

V.LA NACIÓN

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua indica el significado de la voz Nación. (Del lat. *natĭo, -ōnis*).1. f. Conjunto de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. 2. f. Territorio de ese país. 3. f. Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común.

Generalmente cualquier sujeto no familiarizado con el contenido de nuestra materia identifica como equivalentes al Estado y la nación. Esto no es necesariamente así. Cuando se hace referencia a la Nación y se profundiza en su contenido, se infiere que se trata de un concepto difícil de precisar; por lo mismo para desentrañar su sentido tenemos que remontarnos al origen mismo del Estado.

De acuerdo con la teoría de las organizaciones, en estas su elemento fundamental que es el factor humano; es decir, y transportando el postulado a la agrupación dominial denominada Estado, vemos que éste agrupa hombres, seres racionales y libres, dotados de una vida y de un fin personal; individuos y no fragmentos individualizados de una especie.

Afirma el profesor Dabin que: “La nación es la suma de individuos, la serie de generaciones sucesivas marcadas con el mismo carácter nacional... La nación se conforma con los individuos, miembros actuales y futuros de la misma nación” (Furet 1989)¹⁵.

“Entendemos por nación -comenta el profesor pablo Lucas Verdú (1981)- una comunidad que, arrancando de un pasado histórico y mediante la síntesis de diversos elementos importantes pero no exclusivos (raza, lengua, costumbres, etc.), intenta, lográndolo a veces, constituirse en Estado”¹⁶.

¹⁵ *Ibíd.*, pp. 24 y 25.

¹⁶ VERDÚ, Pablo Lucas. Curso de Derecho Político. (3 volúmenes). Edit. Tecnos. Madrid, 1981. p. 84.

El autor político español Vázquez de Mella definió a la Nación como: “El espíritu común basado en la unidad de creencias y revelado en una historia general independiente constituye la Nación. Donde no hay espíritu común, ni unidad de historia general independiente, habrá Estados y agregaciones de pueblos diversos, pero no hay nación”¹⁷.

De todo lo anteriormente vertido tenemos la obligación de concluir la exposición. La nación es el conjunto de generaciones pasadas, presentes y futuras que comparten una idiosincrasia.

De esta forma, el Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real academia de la Lengua, señala que la idiosincrasia son los rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o de una colectividad. La idiosincrasia compartida por los nacionales –La nación como sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad- refiere el compartir Historia, tradiciones, principios, valores, religión, usos, costumbres, lengua, arte, cultura... Quien adopta la nacionalidad desea compartir ese sentido nacional, el espíritu de cuerpo, el sentir del grupo, la idiosincrasia, conformada a través del tiempo, por el encuentro de las distintas generaciones en un lugar territorial determinado.

VI. SOBERANÍA

Las primeras Monarquías que consiguieron la unidad nacional, Francia, Inglaterra, España, capaces de organizar una burocracia, una ordenación jurídica, así como el establecimiento de sólidas bases financieras y ejércitos potentes, constituirían los primeros poderosos Estados de la historia. “Una vez establecido el Estado nacional, el nombre se elevaba a una abstracción perfecta, conforme a las varias fases del desarrollo institucional”¹⁸.

Señala el profesor Passerin D’Entrèves (1970) que: “La palabra soberanía -*souverin* en francés o *sovranità* en italiano- surge en el siglo XVI, pretendiendo significar un Estado al que los escritores le impusieron la tarea de “dominar”¹⁹.

Alesandro Groppali señala que, en términos generales, la palabra soberanía tiene relación directa con dos aspectos de la vida política. Por una parte, la soberanía se refiere a la “*summa potestas*”, es decir, al supremo poder, que no admite poder ulterior alguno, lo cual es equivalente a la expresión: *rex est imperator in regno suo*. De igual forma, el otro aspecto fundamental de la

¹⁷ VÁZQUEZ DE MELLA, J. “Obras completas”, IV-V. Junta del Homenaje a Mella, Barcelona, 1931, p. 48.

¹⁸ Ídem.

¹⁹ PASSERIN D’ENTRÉVES, Alessandro. La Noción de Estado. Centro de Estudios Universitarios. Madrid, 1970. p. 133.

soberanía es el de la libertad. Desde los siglos XIII y XIV, cuando aún no tenía carta de naturaleza el término soberanía, entre los juristas de Bolonia se utilizaba la palabra libertad como sinónimo de independencia²⁰.

Maurice Hauriou,: “la soberanía significa más que un concepto abstracto, una realidad que se identifica con la propiedad del poder, de tal suerte que puede radicar en el rey, en una asamblea o en la nación, y el problema que se plantea consiste en investigar en nombre de quien se gobierna, pues de su respuesta se sabrá si se trata de un sistema absolutista o democrático, según que se gobierne en nombre del rey o de la nación. No hay duda que la propiedad del poder es de la nación, y si se le usurpa por una o varias personas, es algo que corresponde a lo que llamaríamos patología política” (Hauriou 1944)²¹.

Luego entonces, la cualidad que connota al Estado moderno es que tiene el poder de crear el derecho positivo, es decir, el ordenamiento jurídico, y el de aplicarlo dentro de su territorio, aun contra la voluntad de los particulares, lo cual supone la intervención de varios órganos estatales y la necesidad de que éstos ajusten sus actos a las normas legales vigentes, de donde se desprende el principio jurídico de que los actos que realiza deben presumirse conformados a la ley, salvo prueba en contrario. Esto es lo que se denomina Estado de Derecho.

Del anterior señalamiento podemos decir que ninguna persona física o jurídica ajena a la organización estatal puede o está facultada para crear y modificar el ordenamiento jurídico que rige a un Estado, para aplicarlo en los casos concretos de actualización de las normas, o para actuar en forma coactiva. Este poder es monopolio del Estado.

El poder supone necesariamente obediencia voluntaria o forzada por la coacción, pero siempre determinada por la ley; por tanto, cumplir un mandato que no satisfaga este principio de legitimidad carece por entero de significación jurídica, pues sólo se tratará de un hecho irregular susceptible de nulificar.

VII.VARIANTES DE LA SOBERANÍA: POPULAR, NACIONAL O ESTATAL

Pero la cuestión original queda en el aire, a quién pertenece el poder supremo en el Estado, el poder del que provienen todos los demás, es decir, la “soberanía”.

²⁰ GROPPALI, Alesandro. Doctrina General del Estado. Edit. Porrúa. México, 1944, p. 180.

²¹ Ver el Capítulo III, sec. IV de HAURIUO, Maurice. Principios de Derecho Público y Constitucional. Edit. Ediciones Reus. Madrid, 1927.

En la teoría democrática, la soberanía, como ya vimos, pertenece al pueblo. Pero la noción de pueblo puede interpretarse de maneras opuestas, según se haga hincapié en los ciudadanos que lo componen o en la comunidad que ellos forman.

En este sentido, la soberanía es, como dice el profesor Rafael Bielsa: “esencialmente un hecho o un estado de hecho que se ha manifestado originariamente como un poder de decisión o de mando con prescindencia de la juridicidad o legitimidad del mismo”²². Este jurista considera que las características de la soberanía, además de las ya señaladas en el pensamiento de Bodin, se pueden resumir en dos:

- A) La potestad exclusiva: que es la existencia de un poder público único y superior sobre cualquier otro dentro del Estado.
- B) La unidad: es decir, no hay más que una soberanía, la cual no puede ejercerse simultáneamente por dos gobiernos a la vez, ya sea sobre la misma materia, en el mismo territorio y sobre las mismas personas.²³

La soberanía encuentra su origen, límite y estructura en el acta constitutiva de la persona moral denominada Estado, supuesto expresado por Adolfo Posada: “El Estado se afirma en su vida y relaciones con poder suficiente para mantener un sistema de funciones que se produce y actúa en un orden jurídico, obra de la soberanía de la comunidad Política”²⁴.

El liberalismo subvirtió el concepto de soberanía y concibió dos modalidades de ésta: una, revolucionaria, en la que el pueblo, considerado como un conjunto de individuos, ejerce el sufragio universal (la soberanía popular); otra, conservadora, que reside en un parlamento de voto censitario (la soberanía nacional).

La ideología liberal -dice el maestro Maurice Duverger- es individualista, está basada en la búsqueda del interés personal, que ella afirma que es el mejor medio de realizar el interés general. Nadie puede ejercer el poder más que con el consentimiento de los ciudadanos, que le delegan el derecho de mandarlos.²⁵

²² BIELSA, Rafael. Derecho Constitucional. Edit. Roque Depalma. Buenos Aires, 1959. p. 149.

²³ *Ibidem*, pp. 150 y 151.

²⁴ POSADA, Adolfo: Tratado de Derecho Político. Edit. Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1935, Vol. I, pp. 329-330.

²⁵ DUVERGER, Maurice. Instituciones políticas y Derecho Constitucional. Ediciones Ariel. Barcelona, España, 1970. pp. 90 y 91.

Como se señaló en líneas anteriores, se enfrentaron dos fórmulas de la manifestación de la soberanía, las cuales aparecen en las dos declaraciones de los Derechos del Hombre, tanto en la de 1789, como en la de 1793. De ambas declaraciones se desprenden dos interpretaciones sobre el origen de la soberanía, que es el matiz diferencial, entre los términos *soberanía nacional* y *soberanía popular*.

El profesor mexicano Mario de la Cueva se encarga de señalarnos el contexto histórico en que aparece la primera declaración de derechos del hombre, y dice que esta se redacta dentro de un régimen monárquico limitado, en el cual no se había roto la estabilidad política; mientras que la segunda declaración fue expresión “del más puro pensamiento revolucionario, de la voz de Juan Jacobo Rousseau, del derrocamiento de la monarquía, de la instauración de la república y del establecimiento del gobierno de Asamblea”²⁶.

Podemos decir junto con el profesor George H. Sabine que: “la idea de la soberanía de la nación fue el pensamiento de una *burguesía liberal* que todavía tenía mucho que perder como para lanzar una consigna tan históricamente irresponsable como lo harían los “camaradas” de 1793. Sus dos principales exponentes fueron Francois Guizot y Benjamín Constant. En Alemania, sus más genuinos representantes fueron Savigny y J. F. Puchta, que constituyeron la llamada Escuela Histórica Alemana, que embonará más tarde, ya no sólo con el liberalismo moderado, sino con el historicismo conservador francés del conde Joseph de Maistre y de Luis Gabriel de Bonald”²⁷.

En el fondo de esta tensión de posiciones, late una disyuntiva secular: o bien el individuo se afirma ante la sociedad, renunciando a cualquier valor absoluto, o bien se subsume en los valores nacionales renunciando a cualquier afán individual.

En otros términos, para este autor: “La soberanía popular resulta engañosa y sutilmente peligrosa, pues más se utiliza como lenguaje de poder que como instrumento de control y de juicio sobre la conducta de los gobernantes. Las repúblicas por sus dimensiones y su constitución real, generan poderes mediatizados y, muchas veces, se alejan electores y elegidos. En cambio, las pequeñas comunidades, son viveros de verdaderos líderes, probados en su rectitud y en su capacidad”²⁸.

²⁶ *Ibidem*, p. 135.

²⁷ ver a SABINE, George. *Historia de la Teoría Política*. Fondo de Cultura Económica. México, 1965. pp. 520 y ss.

²⁸ *Ibidem*. pp. 156- 178.

Continúa comentando el autor Pablo Lucas Verdú que: “Las consecuencias del postulado de la soberanía popular son: el sufragio universal, que se considera un derecho de cada ciudadano, y el republicanismo. Esta es la gran diferencia con la soberanía nacional, la cual pretende armonizar la monarquía con el sufragio. La soberanía popular tiende a la democracia directa o, por lo menos, a la admisión de las instituciones de democracia semidirecta, como la iniciativa popular y el referéndum”²⁹.

En la actualidad jurídica, el profesor Alfonso Ruiz desarrolla un criterio de justificación del sistema democrático, según el cual es justo que toda persona participe en la decisión colectiva sobre lo que le afecta, como consecuencia de la relevancia de la autonomía individual –libertad positiva- (consecuencia de entendernos libres e iguales). Así, aquel principio se entenderá “en referencia a decisiones que pueden llamarse simples de primer nivel, es decir, decisiones que tienen consecuencias directas en la realidad. (...) Sin embargo, para que el principio sea válido y completo es imprescindible también, en segundo lugar, que el derecho de participación alcance a decisiones de segundo nivel –o, por así llamarlas, ya que son lógicamente superiores o previas: metadecisiones.- es decir, a las decisiones que no afectan directamente a la realidad sino al propio ejercicio del derecho de decisión: son las decisiones a propósito de si se debe, y cuándo, tomar una decisión. (...) A esta situación, Robert Dahl la llama el “control de agenda”. Y por cierto, que este derecho a participar en las decisiones de segundo nivel es imprescindible, pues sin él, la legitimidad democrática es un fraude.

Ahora, las decisiones y metadecisiones presuponen otras decisiones, las cuales el autor llama decisiones de tercer nivel o metametadecisiones: “son las decisiones que suministran el marco imprescindible en el que actuar democráticamente.”³⁰

De lo anterior, se puede decir que no es necesaria la legitimidad democrática de las meta-metadecisiones para que las metadecisiones y decisiones sean legítimas, con tal que las cuestiones por decidir en el ámbito de la democracia (ámbito circunscrito por las meta-metadecisiones de una determinada sociedad) se circunscriban a los afectados y estos participen de ellas. ³¹Por ello, existen ciertas decisiones sobre el ámbito de la democracia que son ilegítimas

²⁹ Ídem.

³⁰ Ruiz M., Alfonso. Problemas de Ámbito de la Democracia. Disponible en Portal Doxa Hemeroteca, tomado el día 13 de junio de 2011 de la dirección web: <<http://www.cervantesvirtual.com/porta/DOXA/hemeroteca.shtml>> visitado 29-09-07. p 105.

³¹ Ídem.

o injustas, piénsese por ejemplo en el negarles el derecho a voto a las mujeres: se les está negando la posibilidad de participar a sujetos que son afectados por las decisiones colectivas.

El jurista Pedro Salazar nos explica sobre la anterior aseveración que: este mismo principio fundamentador de la democracia, implica la autolimitación de este mismo para hacerlo posible: si los afectados pueden decidir sobre lo que les afecta y si son afectados -porque lo consideramos justo-, no se puede decidir negar que se afecta a un afectado, pues de esa forma el afectado no podrá decidir sobre lo que le afecta (éticamente). Lo anterior tiene por presupuesto toda la fundamentación ética de entender a todo individuo de la especie humana como sujeto moral, y un fundamento iusconstitucional en los derechos fundamentales positivizados (no solo es justo que sea así, sino que también debe ser así). Eso es así, ya que tanto la regla de la mayoría, como el principio de participación en las decisiones que nos afectan, tienen por premisa lógica concreta que la aceptación del respectivo principio como mecanismo para decidir en el presente implica la aceptación de la idoneidad de estos principios para adoptar las decisiones futuras.³² En el fondo, aceptar la idoneidad presente negando su idoneidad futura sería una afirmación autocontradictoria.

Flavio Quezada Rodríguez señala que: “Si se entiende por legitimidad democrática la explicación ética del sistema institucional en base a las ideas fundamentadoras de la democracia. Se puede ahora, con los anteriores fundamentos de la democracia sintetizar criterios desde los cuales se puede realizar crítica desde la legitimidad democrática. Así, habría que preguntarse: ¿Permite la institucionalidad política vigente la expresión fiel de la pluralidad y diversidad social? ¿Resguarda los derechos fundamentales? ¿Son un efectivo y representativo método para ponernos de acuerdo? ¿Es reconocible “mi” voluntad en “nuestra” voluntad sobre lo el mínimo normativo para vivir en comunidad? ¿La regla de la mayoría se expresa de manera real? ¿Existen reales resguardos para las minorías? ¿es un buen procedimiento que permita tomar buenas decisiones, como decisiones imparciales? ¿Que permita publicitar las razones del por qué se decide? ¿Que permita la participación en las decisiones y metadecisiones de los ciudadanos y ciudadanas? ¿Es

³² Salazar, Pedro. La democracia Constitucional. Fondo de Cultura Económica, México, 2006. p 134.

un marco de meta-metadecision adecuado para cumplir las preguntas anteriores? Esta última pregunta es la decisiva.”³³

En este sentido se habla de los derechos democráticos, ya no del individuo, sino de una colectividad. Se habla de un derecho colectivo y no de una garantía individual, derecho humano o derecho político de un sujeto en particular. Aquí se presentan situaciones en las cuales se habla de intereses colectivos e intereses difusos. En este sentido, tanto los intereses colectivos como los difusos se refieren a una pluralidad de situaciones de ventaja de carácter individual, pero que en los primeros existe una organización, como expresión de la estructura tendencialmente unitaria del colectivo, que aseguraba unicidad de tratamiento de esos intereses y uniformidad de efectos de la resolución jurisdiccional; en tanto que los segundos están considerados todavía en forma atomística, por lo que carecen de los instrumentos para una valoración unitaria.³⁴

De lo anterior se deduce la posibilidad de invocar las llamadas Acciones populares, las que puede ejercer cualquier ciudadano en defensa del interés de una comunidad de personas o del interés público. El profesor Guillermo Cabanelas en su Diccionario enciclopédico de derecho usual, describe la figura acciones populares: “Dábase este nombre, en lo procesal, a la que podía ejercitar cualquier ciudadano o muchos de ellos, ya en beneficio particular, ya en asuntos de interés del pueblo.”³⁵

VIII. LA SOBERANÍA EN EL DERECHO MEXICANO

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

El texto es claro para quienes leemos con atención: Estado, nación, pueblo y población son conceptos distintos, a los cuales se han venido clarificando para encontrar un sentido a ese sentir plasmado por El Constituyente originario.

³³ Quezada Rodríguez, Flavio. De los Fundamentos de la Democracia a la Democracia como fundamento: criterios de legitimidad democrática. Rescatado de la página electrónica en línea el día 12 de agosto del 2011: <http://www.jornadasderechopublico.ucv.cl/ponencias/DE%20LOS%20FUNDAMENTOS%20DE%20LA%20DEMOCRACIA%20A%20LA%20DEMOCRACIA%20COMO%20FUNDAMENTO.pdf>

³⁴ Vigoriti, Vincenzo, Interessi colletivi e proceso. La legitimazione ad agire, Giuffré, Milán, 1979, pp. 42-44.

³⁵ Cabanelas, Guillermo. Diccionario enciclopédico de derecho usual. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1979, T. I, p.85.

La población, concepto sociológico y jurídico, es el conjunto de habitantes en un tiempo y lugar determinado. El pueblo, luego entonces, es el conjunto de habitantes, desprendido del núcleo poblacional, que reúne las características de ser mexicanos y gozar de los derechos políticos; esto tiene su soporte jurídico normativo en los propios artículos 30, 34 y 35 del código constitucional.

En el Estado diseñado por los autores del texto constitucional, se nos indican con precisión, que a diferencia del Estado liberal, la soberanía ya no corresponde al pueblo; sino que la soberanía corresponde a la nación. La soberanía nacional –precisamente, de la nación-, reside-pero no es suya- sino, reiteramos, es de la nación. La residencia, que estipula la Carta Magna, se orienta a señalar que tiene un carácter esencial y originariamente en el pueblo; pero este no es su propietario, sino su depositario.

Lo anterior lo podemos soportar con el artículo 27 de la norma suprema. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual (la nación) ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. (Reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial De La Federación el 10 de enero de 1934. El subrayado y el paréntesis son del autor de este trabajo).

Lo anterior implica que la propiedad privada tiene su origen y límite en la propiedad nacional. La nación, como se ha venido apuntando, es el conjunto de generaciones pasadas, presentes y futuras que comparten una idiosincrasia. Esto significa que la propiedad en México tiene una connotación eminentemente social; pues el Estado (“cuerpo político de la nación”, como ha interpretado la Suprema Corte de Justicia), tiene que velar porque los bienes nacionales –de dominio público o privado- se usen adecuadamente, preservándose para que las futuras generaciones también puedan disfrutarlas. Lo anterior sería descrito con una metáfora en la cual se indica que. “los bienes que tenemos los mexicanos de la actualidad, son préstamos que nos han hecho nuestros nietos”.

IX. LA SOBERANÍA EN LA GLOBALIZACIÓN Y EL NEOLIBERALISMO

El neoliberalismo es impulsado principalmente por los consorcios transnacionales cuyo origen se ubica en los países a los cuales se les ha denominado centrales, cuyos integrantes son la tríada:

Estados Unidos de Norteamérica, Unión Europea, y los países del sureste asiático. Del otro lado se encuentran los países periféricos, que son los destinatarios de las políticas económicas globalizadoras.

Señala el profesor Víctor Flores Olea que: “es difícil de rebatir el argumento de que las nuevas políticas económicas del neoliberalismo, adoptadas por un considerable número de países, han originado enormes contrastes: progreso innegable y riqueza para unos, pero miseria y explotación para otros, la gran mayoría. Libertades de forma, al lado de opresiones y marginaciones; estímulos para unos y control para otros; avance tecnológico y destrucción de la naturaleza; para unos pocos, mejores condiciones de trabajo y liberación de sus cargas más inhumanas y, al mismo tiempo, subordinación a los objetivos generales de la acumulación y reproducción del capital. Son algunas de las principales falacias (y contradicciones) que definen la “nueva economía liberal”.³⁶ Véase el caso de los llamados “indignados”.

Sobre el anacronismo insostenible de esta vuelta al pasado, el neoliberalismo ha hecho tabla rasa de las experiencias políticas y sociales de los últimos dos siglos, refugiándose en un abstracto principio democrático. A cambio de adoptar el modelo neoliberal en lo económico, los países que han seguido la línea, han tenido un acicate fundado en una “visión política” que se conforma con la legalidad externa y formal de los procesos legales y electorales de su actuación.

Con la orientación neoliberal se ha manipulado el concepto de la democracia, la cual tiene un contenido limitado a sólo elegir representantes con apego a derecho. Indudablemente que esa postura simplista, se aleja del auténtico concepto de la democracia, que es una forma de vida de los pueblos para decidir e influir en el contenido de las políticas gubernamentales y su dirección.

En México, La crisis del año 1982 fue significativa por la "crisis de hegemonía" que se presentó en la alianza entre el Estado y los empresarios, representantes del capital nacional y los beneficiarios directos de las políticas económicas basadas en el modelo proteccionista y de sustitución de importaciones. La nacionalización de la banca fue el evento que provocó la ruptura del bloque político y empresarial.

³⁶ FLORES OLEA, Víctor y MARIÑA FLORES, Abelardo. Crítica de la Globalidad. Dominación y liberación en nuestro tiempo. Edit. Fondo de Cultura Económica. México, D. F. 2004. Pp. 124-129.

Con la nacionalización de la banca, los capitalistas mexicanos que se sintieron "traicionados" rompieron la alianza con la burocracia política y redefinieron la estrategia para su recomposición. Bajo el impulso de un Estado interventor pero con una fuerte orientación tecnócrata neoliberal para beneficio de los dueños de los grandes capitalistas, se inicia la reinención del Nuevo Estado mexicano con base en un "proceso de negociación neocorporativa entre los empresarios y el gobierno, fincado en compromisos e intereses mutuos".³⁷

Este cambio afectó profundamente todo el tejido de la sociedad mexicana, pero el costo lo vienen pagando sobre todo aquellos que tienen menos instrumentos políticos para defender su posición: los marginados, los indígenas, el sector agrícola de temporal, los micro, pequeños y medianos empresarios e incluso algunos de los grandes; los sindicatos, y una clase media consumista y muy dependiente de las actividades burocráticas. Para imponer el cambio y controlar las inevitables reacciones en contra, el supuesto neoliberalismo económico se hizo acompañar y apoyar del autoritarismo tradicional, cuyos dos grandes pilares eran el presidencialismo sin límites y el partido de Estado; y ahora la partidocracia.

Los sucesivos gobiernos neoliberales y globalizadores, desde el Presidente Miguel de la Madrid, se han caracterizado por ceder a las exigencias de las corporaciones abriendo indiscriminadamente el mercado nacional a las importaciones y a la inversión extranjera directa y renunciando a organizar políticas industriales que, a través de la regulación del ingreso y operación del capital transnacional, permitieran enfrentar los grandes rezagos nacionales en cuanto a desarrollo económico, niveles de empleo y bienestar.

Los resultados de la praxis son éstos: Una economía desindustrializada creciente, desarticulada, que exporta grandes volúmenes de mercancías, sigue teniendo un saldo comercial estructuralmente deficitario; una progresiva dependencia con respecto a la marcha de la economía de Estados Unidos y de las decisiones de las corporaciones transnacionales, y una escasa capacidad de creación de empleos formales bien remunerados.

La recesión en la que cayó nuestra economía desde finales del año 2000, y la crisis recesiva de 2008, además de sus impactos negativos coyunturales, han puesto de manifiesto las insuficiencias estructurales del modelo económico globalizado subordinado de los últimos años.

³⁷ MEYER, Lorenzo, Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano. Editorial Océano de México. Primera edición. México, D. F. 1995.

En el mejor de los casos, con el neoliberalismo se han registrado ciclos de reactivación seguidas por crisis cada vez más frecuentes y más intensas con altos costos sociales.

El exceso de demandantes de empleo y la contención salarial han evitado su recuperación afectando también el poder adquisitivo de los salarios. La situación anterior lleva a otro mito oficial indefendible: la reducción de la pobreza. Aunque en la práctica, durante más de setenta años se venga utilizando parte del gasto público con fines populistas y clientelistas.

La globalización entraña obligaciones para las naciones. Señala acertadamente el Dr. Rafael Estrada Michel que el “obligarse limita la libertad” porque la globalización llevará a perder principios fundamentales; que si bien, la democracia tiene límites es porque el pueblo tiene límites; que el gran enemigo de la democracia es seguir exclusivamente la orientación globalizadora económica, desatendiendo que el fenómeno globalizador es mucho más amplio que su visión parcial sobre lo económico. No se debe perder nunca de vista, ni olvidar que en el proyecto nacional siempre deben estar como antecedentes y fines los principios y valores de la soberanía nacional y popular.

El efecto más importante de la globalización es la reducción de los espacios políticos porque los espacios de autonomía (economía transnacional) de los Estados son simplemente formales, como legitimación de este orden, asimismo, no le permiten al Estado entablar relaciones en el ámbito de la coacción lo que le resta al Estado capacidad de acción. El Derecho una ciencia en constante mutación y cambio, la cual debe expresar la voluntad del pueblo existente en este momento, el pueblo del presente, es decir el pueblo del contexto actual; es decir la Soberanía Popular. En la Soberanía Nacional deben incluirse y respetarse, el derecho de las generaciones pasadas y sus esfuerzos y proyectos; ellas legislaron teniendo un sentido de anticipación en la cual incluyeron en su concepto de bien público a las generaciones futuras.

México requiere de la reinvención del concepto soberanía. Para ello es necesario marcar las coordenadas: dimensionar el vínculo entre el binomio soberanía y globalización; partiendo del entendido de que la base de la globalización es la solidaridad y la base de la soberanía es la subsidiariedad. Es necesario rescatar el concepto de la soberanía como supremacía y no como poder omnímodo (Este comentario es del Doctor Luis Felipe Martí).

En nuestro país hemos observado como la globalización tiene un fuerte cariz homogeneizador que es resistido por las diversidades internas, pero al menos ha hecho reconocer esas diversidades –multiculturalismo-. La connotación que da sentido a la expresión soberanía popular o nacional, es aquella que se refiere a que la voluntad de la nación está por encima del gobernante en turno, cualquiera que sea el título que se dé al jefe de gobierno. Para legislar deben tomarse en cuenta ambos sentidos de la soberanía: nacional y popular; y no sólo legislar para los grandes corporativos transnacionales.

La Gran Bretaña ha aplicado un modelo de la nueva democracia "Tercera Vía" en la cual intervienen los ciudadanos, los industriales, el gobierno para formular y establecer la política socioeconómica que logre el bienestar social de la mayoría, el compromiso del ciudadano es ser activo políticamente y tener los mismos derechos que si fuese adulto de mayor edad, el empresario organizado e identificado con la nación trabaja e invierte productivamente y promueve el desarrollo económico, el estado construye las leyes que den garantía y credibilidad a los actores políticos y económicos: las familias que comulgan con la nueva democracia y los capitalistas e industriales como aceleradores del progreso social y económico, respetando los valores y culturas tradicionales de sus pueblos pero con mentalidad modernizante. Ideas plasmadas en el libro la tercera Vía de Anthony Giddens.

La solución de la problemática que vive México -y ahora el mundo- es todo un reto. Un reto que se puede abordar a partir de distintos enfoques: desde la movilización ciudadana, el pronunciamiento de políticas gubernamentales más justas y menos corruptas, la planeación y el desarrollo de modelos alternativos con una economía social solidaria, mediante la información y sensibilización en espacios educativos, entre otros. La alternativa se encuentra en el enriquecimiento de las relaciones sociales, replanteando la organización y el bienestar social y ponderar adecuadamente los valores éticos como la cooperación, solidaridad, subsidiaridad, autogestión y desarrollo social, y promoverlos, implantarlos en todas las organizaciones, con relación a la eficiencia, productividad, competitividad y el crecimiento económico.³⁸

³⁸ Monroy, G. B. México: economía solidaria, democracia participativa, soberanía alimentaria y desarrollo local. Aparece en la página web de Vinculando.org. Revista electrónica Latinoamericana en Desarrollo Sustentable.

Por tanto, en la solución son indispensables las acciones conjuntas y la responsabilidad social del Estado y la sociedad civil organizada -no individualista, sino a través de instituciones y de organizaciones no gubernamentales-.

Un ejemplo de la participación social es el siguiente: “Necesitamos transitar de la protesta a la propuesta y a la acción... si orientamos la cultura ciudadana a la corresponsabilidad, el escenario de nuestro país cambiará radicalmente” afirma Luis Weterman, Presidente del Consejo Ciudadano del Distrito Federal. El Consejo es una asociación civil creada en enero de 2007, hace más de cuatro años, con el deseo de generar confianza y fomentar la participación ciudadana en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Desde su origen mantiene un convenio con el gobierno de la ciudad para actuar como un órgano de consulta y análisis, coadyuvar con las autoridades y vincularse en ciertos programas y proyectos. Tiene además, la facultad de monitorear el desempeño de algunas actividades de ministerios públicos, juzgados cívicos, comandancias de la policía... “nuestro primer objetivo fue construir puentes hacia las autoridades, y el principio básico, lograr que la sociedad comenzara a denunciar sucesos irregulares o inconvenientes. A partir de ahí, implementamos planes y acciones para generar esa cultura”.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIELSA, Rafael. *Derecho Constitucional*. Buenos Aires, Roque Depalma, 1959

BISCARETTI DI RUFFIA, P. *Derecho Constitucional. Prólogo de Pablo Lucas Verdú*. Madrid, Tecnos, 1927.

BURDEAU, George. *Derecho Constitucional e Instituciones Políticas*. Madrid. Editora Nacional, 1981, 1981.

CABANELAS, Guillermo. *Diccionario enciclopédico de derecho usual*. Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1979, T. I

CERVANTES, José. La Globalización y el Derecho Laboral. *Revista Investigaciones Jurídicas Departamento de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Guanajuato*. México. XV. 15 - 16. 2002.

- CHEVALLIER, Jean Jacques. *Los Grandes Textos Políticos*. Madrid, Aguilar, 1985.
- DABIN, Jean. *Doctrina General del Estado*. México: JUS, 1946.
- DE LA CUEVA, Mario. *La Idea del Estado*. México: UNAM, 1980.
- DICCIONARIO JURÍDICO MEXICANO. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, Porrúa, 1998.
- DUVENGER, Maurice. *Instituciones políticas y Derecho Constitucional*, Barcelona, Ariel, 1970.
- FÉDOU, R. *El Estado en la Edad Media*. Madrid, EDAF Ediciones, 1977.
- FLORES OLEA, Víctor y MARIÑA FLORES, Abelardo. *Crítica de la Globalidad. Dominación y liberación en nuestro tiempo*. Fondo de Cultura Económica, México, 2004.
- FURET, F. *Pensar la Revolución Francesa*. Barcelona, Petrel, 1989.
- GROPPALI, Alessandro. *Doctrina General del Estado*. México: Porrúa, 1944.
- HAURIOU, Maurice. *Principios de Derecho Público y Constitucional*. Madrid: Ediciones Reus, 1927.
- JELLINEK, Georg. *Teoría General del Estado*. Traducción de Fernando de los Ríos Urruti Buenos Aires. Albatros, 1954.
- KELSEN, Hans. *La teoría pura del Derecho*. México. Nacional, 1981.
- LLANO, Carlos. *Las Siete culturas del capitalismo*. Revista Istmo, Núm. 227. Edit. Centros Culturales de México, A. C. México, 1996.
- LOWESTWEIN, Karl “*Teoría de la Constitución*” Ed. Tecnos, 2ª. Edición, Madrid, 1976.
- MEYER, Lorenzo. *Liberalismo autoritario. Las contradicciones del sistema político mexicano*. (1era ed) México. Océano de México, 1995.
- PAZ, Octavio. Chiapas ¿nudo ciego o tabla de salvación?, en Vuelta (Suplemento extraordinario), febrero, 1994.

PONS-VIGON, Nicolas, coordinador. Existe una alternativa. Políticas económicas y estrategias laborales más allá de la corriente dominante. Prefacio de Dan Cunniah, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2011.

POSADA, Adolfo. *Tratado de Derecho Político*. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1935.

RUIZ M., Alfonso. Problemas de Ámbito de la Democracia. Disponible en Portal Doxa Hemeroteca, tomado el día 13 de junio de 2011 de la dirección web: <<http://www.cervantesvirtual.com/portal/DOXA/hemeroteca.shtml>> visitado 29-09-07.

SABINE, George. *Historia de la Teoría Política*. México: Fondo de Cultura Económica, 1965.

VÁZQUEZ DE MELLA, J. "Obras completas", IV-V. Junta del Homenaje a Mella, Barcelona.

VERDÚ, Pablo Lucas. *Curso de Derecho Político*. Madrid. Tecnos, 1981.

VIGORITI, Vincenzo. *Interessi colletivi e proceso. La legittimazione ad agire*. Giuffré, Milán, 1979.

WEBER, Max. *Economía y Sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.